



**OFICIO**

**N/REF:** Expediente: 001-068057

**FECHA:** 6 de mayo de 2022

**ASUNTO:** Resolución

**DESTINATARIO:**

Con fecha 20 de abril de 2022, tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia (UIT) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, (MAPA), solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, formulada por , registrada con el número **001-068057** en la que solicita:

*Información en materia de pesca sobre los siguientes 5 países:*

- Kenia
- Tanzania
- Mozambique
- Somalia
- India

*En concreto, información sobre:*

- *Acuerdos entre empresas españolas y el gobierno de cada uno de los cinco países mencionados relativos al acceso de buques pesqueros españoles a las aguas de los cinco países para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.*
- *Cualquier permiso o autorización concedida por el gobierno español a esas empresas españolas relativa al acceso de sus barcos pesqueros a aguas de los cinco países.*
- *Cualquier documento relativo al acceso de dichos barcos españoles a aguas de los cinco países y relativo, entre otros, a:*
  - 1) *los nombres de los buques pesqueros españoles a los que se permitió el acceso a las aguas de los cinco países.*
  - 2) *los números IMO de cada buque pesquero español a los que se les permitió el acceso a las aguas de los cinco países.*
  - 3) *el número de capturas de cada especie correspondiente a cada buque.*
  - 4) *la cuota de pesca asignada a cada especie en aguas de los cinco países.*

Una vez analizada la solicitud, y consultados los archivos de esta Dirección General, **RESUELVO conceder parcialmente** su solicitud, facilitando los datos relativos al nombre, número IMO y matrícula de los buques, especies que capturan, país y fechas en las que han tenido acceso a sus aguas y que se recogen en el **anexo** que se adjunta, **denegando** el acceso al resto de datos solicitados en base al art. 14.1.h) alusivo a los intereses económicos y comerciales.

En primer lugar, en el artículo 113 del Reglamento 1224/2009, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen de control de la Unión para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se obliga a los estados miembros y la Comisión, a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que los datos recopilados y recibidos al amparo de dicho Reglamento, sean tratados de conformidad con las normas aplicables, y así garantizar el secreto profesional y comercial.

En este sentido, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en su Criterio 1/2019 de 24 de septiembre sobre APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 14, NUMERO 1, APARTADO h), DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE: PERJUICIO PARA LOS INTERESES ECONÓMICOS Y COMERCIALES, aborda esta cuestión, aludiendo a la Comunicación de la Comisión de 22 de diciembre

C/ Velázquez , 144  
28006 MADRID  
Tel.: 91 3476040



de 2005 relativo a las normas de acceso al expediente de la Comisión (...) en el que se señala, en relación con este tema, que *"Cuando la divulgación de información sobre la actividad económica de una empresa pueda causarle un perjuicio grave, dicha información tendrá carácter de secreto comercial. Como ejemplos de información que puede considerarse secreto comercial cabe citar la información técnica y/o financiera relativa a los conocimientos técnicos de una empresa, los métodos de evaluación de costes, los secretos y procesos de producción, las fuentes de suministro, las cantidades producidas y vendidas, las cuotas de mercado, los ficheros de clientes y distribuidores, la estrategia comercial, la estructura de costes y precios y la estrategia de ventas"*.

La información solicitada en caso de ser facilitada revertiría en perjuicios para las empresas españolas firmantes de los acuerdos. El volumen de capturas y las zonas concretas de pesca donde se realizaron las mismas equivale, en este caso, a lo que en otros sectores productivos supondría facilitar los datos sobre fuentes de suministro o cantidades producidas y vendidas, cuestiones éstas que han sido consideradas como información comercial y amparadas como información sujeta al secreto profesional.

En base a lo anterior, para profundizar en el análisis de la solicitud, se ha considerado el test del daño y del interés público. A través del primero se comprueba la probabilidad del hipotético perjuicio o lesión y la existencia de un nexo causal entre el acceso a la información que se solicita y el perjuicio alegado, y mediante el segundo se comprueba si existe en el caso algún interés superior al protegido con la limitación que justifique el acceso solicitado. Una vez sopesadas dichas argumentaciones, consideramos que los argumentos a favor del interés público tienen un carácter general y no específico respecto del límite por lo que debe primar, en este caso la protección de los intereses económicos y comerciales de las empresas concernidas.

Ponderado pues el peso de la aplicación del límite frente al interés público existente en la divulgación de la información, esta Dirección General **deniega** el acceso a la información.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

La Directora General de Pesca Sostenible.

Fdo.: Isabel Artime García

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN